

Para pedir su liberación

Familiares de presos políticos de Venezuela inician huelga de hambre

● La medida ocurre en el comando “Zona 7” de Caracas, luego de que solo 17 de los más de 50 detenidos en el recinto fueran excarcelados.



CECIDA

El dilema: Si el gobierno cede, valida la amnistía; si no, se arriesga a un costo humano que dañaría su imagen internacional.

Un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela se sumó formalmente este sábado a la huelga de hambre iniciada por sus parientes el día anterior. La protesta tiene lugar en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como “Zona 7” en Caracas, donde los manifestantes exigen la liberación inmediata y plena de todos los detenidos. La acción surge como respuesta a lo que consideran promesas incumplidas por parte del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, respecto a la celeridad de una Ley de Amnistía que aún no se concreta.

La jornada estuvo marcada por sentimientos encontrados, ya que pocas horas antes del inicio de la huelga de familiares, las au-

toridades hicieron efectiva la excarcelación de 17 personas. Entre los liberados destacan figuras sindicales como José Elías Torres y William Lizardo, además de Zulma Lasala y dos jóvenes con trastorno del espectro autista, Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá. No obstante, para las organizaciones de derechos humanos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, estas medidas son insuficientes, dado que en dicho comando permanecen reclusas más de 30 personas en condiciones de incertidumbre judicial.

El malestar de los familiares se centra en el aplazamiento del debate legislativo. Aunque el chavismo había prometido la aprobación de la amnistía para el 13 de febrero, el Parlamento postergó la discusión final para el próximo jueves de-

bido a discrepancias sobre un artículo que obligaría a los beneficiados a presentarse ante la justicia. Petra Vera, vocera de los familiares, manifestó que se sienten “burlados y desmoralizados”, subrayando que el desespero y la depresión han hecho mella en la salud física y mental de quienes continúan privados de libertad.

Este conflicto representa el primer gran desafío social para la transición política venezolana tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. Mientras el gobierno interino intenta proyectar una imagen de apertura democrática ante la comunidad internacional y la administración de Donald Trump, la resistencia del ala legislativa del chavismo para aprobar una amnistía sin condiciones mantiene en vilo a cientos de familias.